

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE HISTORIA

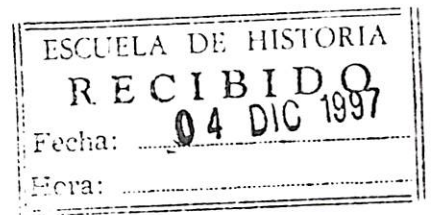
CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTAL
- FEB 20 -
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL
Apdo. 86-3000 Heredia, Costa Rica

PRODUCTO FINAL

LA CRISIS CENTROAMERICANA DE LA DECADA DE 1980 EN PERSPECTIVA HISTORICA

PROYECTO: LOS SECTORES MEDIOS COMO ACTORES DEL DESARROLLO
HISTORICO SOCIAL CENTROAMERICANO EN EL SIGLO XX. ESTADO
DE LA CUESTION

Doctor Héctor Pérez Brignoli



LA CRISIS CENTROAMERICANA DE LA DÉCADA DE 1980 EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

10 FEB 1998

Héctor Pérez Brignoli

1. INTRODUCCION

La crisis centroamericana de la década de 1980 puede apreciarse ahora con más perspectiva y es posible intentar, en consecuencia, una comparación con otras épocas del pasado. ¿Cuáles son los cambios permanentes heredados de esa década turbulenta? ¿Hacia dónde va la región entera después de una violencia tan global y sangrienta como la vivida en esos años? Para responder estas preguntas es necesario combinar el estudio del pasado reciente con la perspectiva más larga de la historia sin más.

Voy a tratar de mostrar que la crisis de los 80 constituye un "major turning point" en la historia centroamericana. Precipita o prepara, según los casos, redefiniciones sustanciales en las relaciones entre: a) economía nacional - mercado mundial; b) estado - economía; c) soberanía nacional - globalización; d) sociedad civil - estado. En los últimos 200 años, la región sólo atravesó por una situación similar en el período 1826-1857. En esos largos 30 años de guerras civiles e intervenciones extranjeras, se establecieron los parámetros básicos que orientaron la vida económica, social y política de las sociedades centroamericanas hasta la década de 1980.

2. LA CRISIS DE LOS AÑOS 80: REVOLUCION Y GUERRA CIVIL

La crisis de los 80 puede caracterizarse en forma sencilla diciendo que fue una situación en la que coincidieron la guerra civil generalizada, una amplia intervención de fuerzas externas y un notable colapso económico.

La guerra civil asumió diversas formas. En El Salvador se presentó como una "clásica" guerra revolucionaria, liderada por grupos políticos de la izquierda comunista y no comunista, y sustentada primero por organizaciones de masas urbanas y después por un amplio movimiento de base campesina. En Nicaragua la cosa fue mucho más compleja. Empezó como un amplio movimiento antisomocista en el que coincidieron fuerzas sociales muy variadas, y concluyó con un agudo

enfrentamiento entre los sandinistas y la "contra", dos movimientos de fuerte base popular y notables apoyos externos; en medio de estos conflictos surgieron en la Mosquitia varios movimientos y organizaciones con reivindicaciones de tipo étnico. Este componente étnico, una verdadera sorpresa en el caso de Nicaragua, era parte profunda en la terrible guerra civil guatemalteca, un largo capítulo abierto con la caída de Arbenz en 1954, continuado con los movimientos guerrilleros de los años 1960 y que dio un vigoroso salto insurreccional entre 1978 y 1983.

Las intervenciones extranjeras también asumieron formas muy variadas. Hasta la caída de Somoza en 1979 se puede decir que casi todo se resumía en el apoyo cubano a los movimientos guerrilleros y la continua ingerencia de los Estados Unidos en las operaciones de contra-insurgencia. Pero a partir de ese momento las cosas comenzaron a complicarse. El régimen sandinista logró el apoyo del bloque soviético y la solidaridad de un amplio grupo de países del Tercer Mundo. Por otro lado, tanto la Comunidad Económica Europea como varios países latinoamericanos (México, Colombia, Venezuela, entre otros) marcaron sus distancias con la política de Washington y lograron impedir una eventual invasión norteamericana de Nicaragua. A su vez, la caída del bloque soviético hacia 1989-90 tuvo un efecto decisivo en el relativamente rápido éxito del proceso de pacificación iniciado en 1987.

La crisis económica tuvo su propia dinámica. No hay que olvidar que 1982 fue el año de la crisis de la deuda en toda América Latina. El colapso vino por la conjunción de una caída en los precios de las exportaciones; el incremento de la deuda y la elevación de las tasas de interés a nivel internacional. Con la guerra las pérdidas económicas se agravaron y el nivel de actividad medido a través del PIB comenzó a descender. Inflación, devaluación, salidas netas de capitales y una fuerte desocupación fueron otros rasgos que empezaron a proliferar desde comienzos de los años 80.

Hecha esta caracterización general, se puede pasar ahora a un estudio más detallado de las diferentes fases de la crisis, desde 1979 hasta 1992.

a) Auge revolucionario, 1979-81.

La caída de Somoza en julio de 1979 fue el punto más alto de una oleada revolucionaria que estuvo centrada en el anti-imperialismo, las reivindicaciones nacionalistas y el auge del movimiento de masas. Otros momentos cruciales de dicha



oleada fueron la firma de los nuevos Tratados del Canal de Panamá en 1977, y el aumento de la protesta social y los movimientos de insurrección en El Salvador y Guatemala, entre 1978 y 1981.

El anti-imperialismo fue simétrico del nacionalismo y estuvo asociado con importantes cambios en el contexto de relaciones internacionales. La renegociación de los Tratados del Canal de Panamá alcanzó a ser no sólo una reivindicación nacionalista panameña sino también una expresión de la solidaridad latinoamericana, y más allá aún, de las aspiraciones del Tercer Mundo. El liderazgo personal de Torrijos fue, en este sentido, decisivo, y consiguió alinear en apoyo de la posición panameña a regímenes de tendencias ideológicas muy diversas. Hay que notar también que todo esto se produjo en un espacio internacional abierto por la liquidación de la guerra de Vietnam. Esa etapa, durante la presidencia de Carter, estuvo marcada por un esfuerzo interior de redefiniciones y por una crisis del liderazgo norteamericano que comenzó en el sudeste de Asia (derrota en Vietnam) y se extendió al Medio Oriente (caída del Sha en Irán, crisis en el Líbano, etc.) y la América Central. Los nuevos Tratados del Canal firmados por Carter y Torrijos en 1977 fueron trabajosamente ratificados por el Congreso norteamericano en 1978 y comenzaron a ejecutarse en octubre de 1979. Como lo percibieron con claridad los intereses conservadores, dichos Tratados significaron un notable retroceso en la influencia imperial de los Estados Unidos sobre el Caribe y el istmo centroamericano. La caída de Somoza en julio del mismo año había dado lugar a una abierta beligerancia de países como México y Venezuela frente a una política norteamericana vacilante en la protección de un aliado tan viejo como incómodo, pero igualmente reticente en la aceptación de un reemplazo percibido como inseguro y doloroso. Aún la pequeña isla de Granada instaló un régimen abiertamente desafiante mientras que el régimen cubano se endurecía internamente expulsando a miles de disidentes. La guerra de las Malvinas, en abril de 1982, fue otro momento de exaltación en la beligerancia latinoamericana frente a los intereses y la política de los Estados Unidos al sur del Río Grande, pero pasado ese momento crítico las cosas volvieron a un cauce más tradicional. La crisis económica y el problema de la deuda limitaron drásticamente los márgenes de maniobra frente a un gobierno que en Washington, bajo el liderazgo neoconservador de Ronald Reagan, retomaba aceleradamente los impulsos imperiales.

El auge del movimiento de masas fue la otra nota distintiva de este período. La movilización contra el régimen de Somoza incluyó un espectro muy amplio de fuerzas sociales incluyendo masas urbanas (Managua y León), campesinos (sobre todo en las Segovias), sectores medios e importantes segmentos de la burguesía. El movimiento antisomocista fue acelerado por el reagrupamiento y cambio de estrategia del Frente Sandinista en 1977-78, y por las profundas repercusiones

del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro (10 de enero de 1978). El apoyo externo no fue menos decisivo: los gobiernos de Costa Rica y Honduras facilitaron el apoyo logístico y permitieron a las fuerzas guerrilleras un amplio uso de sus fronteras; Panamá, Cuba y Venezuela contribuyeron con armas y un importante apoyo financiero, mientras que, en los momentos finales y decisivos, la solidaridad de casi todos los gobiernos latinoamericanos proporcionó un apoyo moral insustituible. La caída de Somoza combinó, en ese sentido, la movilización de masas y la insurrección popular con una importante organización militar y una solidaridad ideológica extremadamente rara si nos atenemos a su amplitud y diversidad. Como resultado de todo ello no sólo fue Somoza el desalojado del poder; también la Guardia Nacional sufrió una completa derrota militar y toda su estructura pudo así ser desmantelada.

En El Salvador¹ la protesta social durante la década de 1970 articuló, en forma progresiva, movimientos urbanos de base sindical con movilizaciones de campesinos agrupados en cooperativas y organizaciones guerrilleras, en un clima político de participación cada vez más reducida. El cierre progresivo de los ya estrechos espacios reformistas y los choques cada vez más fuertes entre el gobierno, los partidos políticos de oposición y la Iglesia Católica, precipitaron la crisis. El golpe cívico-militar de octubre de 1979 fue un ensayo de respuesta ante el deterioro del régimen y las amenazas crecientes de la movilización popular. Con el triunfo sandinista las posibilidades de una revolución en El Salvador se tornaron más efectivas y aún todo el istmo centroamericano pareció a punto de incendiarse. En esas circunstancias la Junta de Gobierno surgida del golpe intentó seguir un camino de reformas sociales con una amplia participación popular. El compás de espera abierto en octubre de 1979 se cerró, sin embargo, muy pronto. Los grupos de derecha y los sectores militares más conservadores y tradicionales iniciaron ya en enero de 1980 una escalada represiva que culminó en marzo de ese mismo año con el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. La Junta cambió varias veces su composición y muy pronto fue evidente que se reconstituía, desde el poder, una alianza reaccionaria centrada en ciertos sectores de la Democracia Cristiana. Este reagrupamiento derechista no solo pudo consolidarse gracias a una enorme cuota represiva que golpeó a todo tipo de activistas; ayudó también a forjar una alianza militar entre las fuerzas guerrilleras y las organizaciones de masas, plasmada en el FMLN, y su respectivo brazo político-diplomático, el FDR (Frente Democrático Revolucionario).

¹ Cf. Baloyra, Enrique. El Salvador en transición. Trad. Mária de Simán. San Salvador, UCA Editores, 1984; Armstrong, Robert y Janet S. Rubin. El Salvador: el rostro de la revolución. Trad. J. Samayoa. San Salvador, UCA Editores, 1986, 4a ed. Dunckerley, James S. The Long War. London, Verso, 1982. Cabarrús, Rafael. Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador. México, Ediciones de la Casa Chata, 1983.

La ofensiva general, desatada por el FMLN en enero de 1981 fue un claro reflejo de la nueva situación. El país se desgarraba en la guerra civil y el nivel de violencia alcanzaba límites hasta entonces desconocidos.²

Guatemala³ siguió pautas en cierto modo parecidas a las de El Salvador. A finales de la década de 1970 asistimos tanto a un auge del movimiento de masas urbano cuanto a un agotamiento del régimen político encabezado por los militares. El dato más nuevo y explosivo fue, sin embargo, la creciente participación de las masas indígenas rurales en los movimientos guerrilleros. El propio ejército guatemalteco fue capaz, sin embargo, de modificar su estrategia política y militar con sorprendente rapidez y autosuficiencia. Los rápidos cambios de régimen (golpes de Ríos Montt en marzo de 1982 y de Mejía Victores en agosto de 1983) no deben llamar a engaño; en ningún momento afectaron a los nuevos proyectos contrainsurgentes que empezaron a tener aplicación hacia finales de 1981.

En este contexto de revolución, violencia y luchas populares, la situación de Honduras y Costa Rica adquirió un relieve muy diferente. En el primer caso,⁴ el reformismo militar de los años setenta fue reemplazado por un retorno al poder civil de acusado carácter conservador. En el segundo, una severa y temprana (en el contexto regional) crisis económica⁵ impuso límites muy serios a todo tipo de iniciativa política regional. Así las cosas, en ambos casos se produjo un cambio radical de actitud frente a la situación de Nicaragua. Del apoyo abierto al movimiento anti-somocista en 1978-79 y las simpatías pro-sandinistas en 1980, pasamos a una oposición creciente en 1981. No fue ajeno a ello, por supuesto, el cambio de gobierno en los Estados Unidos. El triunfo de Ronald Reagan en las elecciones de noviembre de 1981 no sólo impuso un viraje conservador; preparó el camino para una eventual intervención norteamericana en Nicaragua y El Salvador. En todo este contexto, la accidental y misteriosa muerte del General Omar Torrijos (agosto de 1981) agregó un elemento de poca significación. Los sandinistas perdieron a un aliado particularmente sincero, y lo mismo ocurrió con los militares reformistas en Honduras y El Salvador. La evolución interna de la propia situación panameña reveló enseguida, y con

² Además de lo citado en la nota anterior, Cf. Dunkerley, James S. Power in the Isthmus. London, Verso, 1988, pp. 335-424; Lungo Uclés, Mario. El Salvador en los 80: Contrainsurgencia y revolución. San José, FLACSO, 1990.

³ Cf. Dunkerley, Op.Cit. pp. 425-515; Carmack, Robert M. (compilador). Guatemala: cosecha de violencias. Trad. Mario Roberto Morales. San José, FLACSO, 1991; Smith, Carol A. (Ed.) Guatemalan Indians and the State, 1540 to 1988. Austin, University of Texas Press, 1990.

⁴ Cf. Varios Autores, Honduras. Realidad Nacional y Crisis Regional. Tegucigalpa, CEDOC/Universidad Internacional de la Florida, 1986; Delgado Fiallos, Anibal. Honduras Elecciones 85 (Más allá de la fiesta cívica). Tegucigalpa, Guaymuras, 1986; Posas, Mario. Modalidades del proceso de democratización en Honduras. Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1989.

⁵ Cf. Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. San José, Editorial Porvenir, 1987.

implacable rudeza, que los militares herederos de Torrijos no estaban dispuestos a continuar enarbolando las banderas populistas y nacionalistas que habían sido tan caras al General.

b) Reacción norteamericana y radicalización sandinista: 1982-1987.

Fue ésta una época de grandes conflictos. Desde febrero de 1981 el gobierno norteamericano acusó al de Nicaragua de injerencia en los asuntos internos de El Salvador; los enfrentamientos entre ambos gobiernos continuaron a lo largo de ese año; en febrero de 1982 el presidente Reagan había ya aprobado un plan de operaciones encubiertas contra Nicaragua administrado por la CIA. Nicaragua comenzó a alinearse con el bloque socialista y la influencia económica y política de Cuba y la Unión Soviética aumentaron notoriamente. La tensión internacional siguió en franco ascenso. La Contra, que agrupaba tanto ex-somocistas como disidentes sandinistas comenzó a operar abiertamente, mientras que comandos de la CIA minaban y bombardeaban los puertos de Corinto y El Bluff. La invasión norteamericana a la isla de Granada (octubre de 1983) adquirió, en este contexto, el carácter de ensayo general de algo de mucha mayor envergadura, destinado a Centroamérica. Los incidentes en la frontera entre Honduras y Nicaragua se multiplicaron y el gobierno norteamericano amplió un viejo tratado militar con Honduras; pudieron así instalarse varias bases militares en dicho país. Apoye Internamente la radicalización del régimen nicaragüense fue notoria; el país se organizó en una verdadera economía de guerra mientras que el flujo de exiliados y desplazados aumentaba sin cesar y se multiplicaban los enfrentamientos entre el gobierno sandinista y la empresa privada.⁶ Las comunidades miskitas en la costa atlántica perdieron su autonomía y pasaron a un claro enfrentamiento con el gobierno sandinista.

Los elementos básicos de la estrategia norteamericana frente a Nicaragua y la guerrilla salvadoreña involucraron aspectos militares y también civiles. Las bases militares en Honduras agregadas a las ya existentes en Panamá constituían el dispositivo más visible; el apoyo a la Contra nicaragüense, instalada en las fronteras de Honduras y Costa Rica y la organización de operaciones clandestinas al cuidado de la CIA, cumplían un doble propósito: socavaban la moral del régimen sandinista provocando a la vez cuantiosos daños humanos y materiales. En el caso de El Salvador la asistencia

⁶ Cf. Vilas, Carlos M. Perfiles de la Revolución Sandinista. Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1987; Ruben Raul y Jan P. de Groot (Coordinadores). El debate sobre la reforma agraria en Nicaragua. Transformación agraria y atención al campesinado en nueve años de reforma agraria (1979-1988). Managua, Editorial Ciencias Sociales, 1989; Spalding, Rose J. Op.Cit.

económica y militar fue fundamental para evitar un derrumbe del ejército salvadoreño ante sucesivas ofensivas guerrilleras. En el plano institucional la estrategia norteamericana consistió en favorecer la realización de elecciones y el retorno a gobiernos civiles. Se buscaba con ello, la implementación de ciertas reformas y la obtención de una legitimación interna y externa en la lucha contra la amenaza guerrillera. Este objetivo, perseguido tenazmente por las administraciones de Carter, Reagan y Bush fue logrado primero en Honduras (noviembre de 1981) y enseguida en El Salvador (1984) y Guatemala (1985). Aunque estos gobiernos civiles terminaron con varias décadas de gobiernos militares los alcances efectivos del poder civil no deben ser exagerados. En los tres casos la subordinación de los militares al poder constitucional siguió siendo extremadamente problemática.

Mientras que los sandinistas nicaragüenses se debatían entre la sobrevivencia y la radicalización, las amenazas guerrilleras en Guatemala y El Salvador pudieron ser contenidas. El costo de la represión fue sin embargo enorme y comprendió un sinnúmero de muertos, centenares de exiliados y muchos miles de refugiados y desplazados.⁷

Los gobiernos latinoamericanos, que habían tenido una activa participación en la solución de los conflictos centroamericanos en 1979-80, tuvieron en toda esta época una presencia cada vez más disminuida. El llamado Grupo de Contadora (Venezuela, Colombia, México y Panamá), constituido en enero de 1983, buscó incansablemente una salida negociada para la crisis centroamericana; a pesar de que contó para eso con el llamado Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Uruguay y Perú) sus logros fueron escasos debido a la oposición norteamericana y a las reticencias de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Costa Rica.

Hacia 1987 era obvio que la situación parecía haber llegado a un "impasse". Después del escándalo Irán-Contras (noviembre de 1986) las actividades encubiertas del gobierno norteamericano no tenían posibilidad alguna de intensificarse; y su misma continuidad quedó en entredicho. Al mismo tiempo el deterioro de la situación económica en Nicaragua y la aparición de la Perestroika en la Unión Soviética llevaron a los dirigentes sandinistas a una importante modificación de su rumbo político.

⁷ Cf. Vergara Meneses, Raúl et al. Centroamérica. La guerra de baja intensidad. San José, DEL, 1989, 3a ed. Sobre los costos humanos y materiales de la guerra y la violencia y las perspectivas de reconstrucción, Cf. Crosby, Benjamin. "Central America" en Lake Anthony and contributors. After The Wars: Reconstruction in Afghanistan, Indochina, Central America, Southern Africa, and the Horn of Africa. New Brunswick and Oxford, Transaction Publishers, 1990.

c) El proceso de paz: 1987-1992.

El período reciente está dominado por los acuerdos de Esquipulas II. Acabamos de mencionar como se abrió hacia 1987 el espacio para la iniciativa del presidente Arias desde la perspectiva nicaragüense; en una óptica centroamericana hay que agregar la presencia política de la Democracia Cristiana en los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y un agotamiento general, después de años de conflictos y enfrentamientos que parecían con cada vez menos perspectivas de salida. De todos modos, lo realmente espectacular de los acuerdos de paz de Esquipulas II, no fue tanto su aprobación en 1987 cuanto su progresivo cumplimiento.

El momento culminante tuvo lugar sin duda en las elecciones nicaragüenses de febrero de 1990. La derrota electoral de los sandinistas y la entrega del poder a la oposición constituyó un típico ejemplo de transacción, impensable apenas unos años antes: el Ejército Popular Sandinista quedó intacto, la Contra fue desarmada y el gobierno pasó a manos de una alianza de partidos que pronto exhibió fisuras de consideración. El contexto internacional de estos eventos incluye, naturalmente, la crisis profunda del bloque soviético y los cambios correlativos en la política norteamericana.

En El Salvador el camino hacia la paz fue más largo y complejo que en Nicaragua. El gobierno de ARENA encabezado por el presidente Cristiani subió al poder en 1989 y se negó, desde el principio, a entrar en cualquier negociación con la guerrilla. En noviembre de ese mismo año, una violenta ofensiva del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) en San Salvador concluyó con un saldo político especialmente doloroso: el alevoso asesinato por miembros del ejército de seis sacerdotes jesuitas que constituían la cabeza de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) y venían jugando un papel clave en pro de las negociaciones de paz. Por otro lado, aunque la ofensiva guerrillera había sido derrotada, las acciones violentas que llegaron incluso a los barrios "aristocráticos" de San Salvador habían puesto en claro que los insurgentes conservaban todavía una apreciable capacidad de fuego, y que podrían volver a utilizarla en cualquier momento. El gobierno, asediado por este peligro y por el unánime repudio internacional provocado por el asesinato de los padres jesuitas comenzó entonces a pensar seriamente en la necesidad de llegar a una paz negociada. Fue en este contexto que una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los esfuerzos del secretario general de dicha organización comenzaron a rendir frutos. Después de dos años de negociaciones, y una vez

efectuadas las necesarias reformas constitucionales, los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el FMLN fueron rubricados por las partes el 16 de enero de 1992.

En Guatemala el proceso de paz duró casi diez años, desde la primera reunión entre el gobierno guatemalteco y las fuerzas guerrilleras, efectuada en Madrid en 1987 a poco de aprobarse los acuerdos de Esquipulas II, hasta la firma final del tratado de paz realizada en diciembre de 1996. Más que en ningún otro caso, el camino hacia los acuerdos guatemaltecos puede verse como un lento proceso de avances y retrocesos, en los que en ningún momento estuvo plenamente garantizado el resultado final. Al igual que en el caso de El Salvador, la intervención de las Naciones Unidas fue clave en cuanto a la reanudación de las conversaciones de paz en 1994.

Dos hechos salientes caracterizaron también este período. El primero tiene que ver con una reconstitución general de los grupos conservadores. Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el istmo en 1989 y 1990 fueron ganadas invariablemente por los grupos políticos más conservadores. Estos signos electorales reflejaban en verdad una situación más profunda: no sólo los grupos dominantes sino también los sectores medios parecían inclinarse ante opciones políticas que privilegiaban las privatizaciones, la disminución del tamaño del Estado y la renuncia a las alternativas reformistas más tradicionales.

El segundo hecho fundamental fue la aparición de una combinación, más complicada que en el pasado, entre conflicto y negociación; aunque el nivel de violencia general disminuía poco hay que decir que sí existían un progresivo y mutuo reconocimiento de las partes en conflicto y una confianza, aunque sea mínima, en las posibilidades de la negociación.

3. LA CRISIS DE LOS 80: COLAPSO ECONÓMICO Y CAMBIO ESTRUCTURAL

De la descripción de la crisis política pasemos ahora al campo económico. El colapso económico fue considerablemente agravado por la guerra civil pero no puede decirse que ambos fenómenos estuvieron vinculados en forma causal. De hecho, todos los países latinoamericanos sufrieron en el curso de los años ochenta procesos similares. Basta mencionar que en 1982, el año que estalló la llamada "crisis de la deuda", el Producto Interno Bruto de la región en su conjunto decreció en más del 1%; mientras que tasas negativas del orden de 5 a 10% afectaron en ese año y los siguientes a países como México, Chile, Perú y Argentina. La crisis tuvo pues orígenes y alcances mucho más amplios que

lo que estaba ocurriendo en el istmo centroamericano. Aparte de las circunstancias coyunturales, puede decirse que fue el resultado de grandes cambios en la estructura de la economía internacional y del agotamiento del modelo de desarrollo que venía imperando en América Latina desde las décadas de 1940 y 1950.⁸ La caída de la Unión Soviética en 1990 y el fin del “socialismo real”, al despejar enteramente el camino para una verdadera mundialización o globalización del capitalismo completó, en cierta forma, el marco de transformaciones estructurales de esta nueva época.

Las fluctuaciones en el producto nacional per capita (Cuadro 1) permiten apreciar en forma general los alcances y secuencia de la crisis económica. En Costa Rica el producto per capita se duplicó entre 1973-80 pero cayó en forma vertical en el período 1980-83. Ningún país centroamericano tuvo una caída tan fuerte. La recuperación de los niveles de 1980 recién se alcanzó hacia 1992, es decir unos diez años después de lo peor de la crisis. Desde el punto de vista de la riqueza por habitante es obvio que en Costa Rica hubo más de una década “perdida”.

En líneas generales se observó un patrón parecido en los demás países centroamericanos: aumentos (aunque moderados) en la década de 1970, caída durante los ochenta y una recuperación muy relativa a comienzos de los años noventa. En términos absolutos, sin embargo, los índices per capita del resto de Centroamérica, se ubican en la mitad de los índices costarricenses. Nicaragua que mantuvo niveles relativamente constantes de riqueza per capita durante los primeros años del régimen sandinista experimentó una severa contracción hacia 1987 que la colocó entre los países latinoamericanos con un producto per capita más bajo. Esta posición desventajosa con respecto al conjunto de los países de América latina y el Caribe se aplica también al conjunto del istmo centroamericano. La recuperación, a inicios de los noventa se ubica muy por debajo de los índices promedio de la región latinoamericana. Esta extrema lentitud en la recuperación, si no la crisis misma, es lo que puede considerarse como resultado de la incidencia neta de la guerra civil en el colapso económico.

Como era de esperarse la mala situación económica multiplicó todavía más las desigualdades. El porcentaje de población rural que puede considerarse como de “pobreza extrema” aumentó de 53% en 1980 a 62% en 1985. En el mismo lapso, la población urbana en situación de “pobreza extrema” pasó de 26% a 37%.⁹

El modelo económico seguido por los países centroamericanos desde la década de 1960 implicaba altos niveles de protección aduanera y subsidios fiscales para la industria manufacturera que producía para el Mercado Común Centroamericano, una importante intervención del estado en la economía (incluyendo subsidios a muchos productores

⁸Véase Edwards, Sebastián. *Crisis y reforma en América Latina*. Buenos Aires, Emecé editores, 1997.

⁹Véase, Flacso. *Centroamérica en cifras, 1980-1992*. San José, 1995, pp.106-108.

agrícolas orientados al mercado interno) y un sector exportador "tradicional" eficiente pero que también gozaba de amplio apoyo estatal en cuanto a créditos y subsidios. El cuadro se completaba con la afluencia de préstamos e inversiones extranjeras, asegurada también por amplias garantías estatales. A finales de los setenta y principios de los ochenta la crisis se tornó "inmanejable" por la coincidencia de tres factores: el deterioro irreversible en los términos del intercambio (caída en los precios de los productos exportados más el aumento de la factura petrolera); el rápido aumento del déficit fiscal y el crecimiento "incontenible" de la deuda externa. A esto se agregó la situación de guerra civil que comenzó, en 1979-80, por hacer pedazos el Mercado Común Centroamericano.

Ante la crisis hubo dos tipos de soluciones: a) el "nacionalismo revolucionario", ya sea en la versión sandinista, o bien en la política más atemperada iniciada por la Junta salvadoreña que tomó el poder a fines de 1979 y seguida después por el gobierno demócrata cristiano encabezado por Duarte. b) los programas de estabilización y ajuste estructural que comenzaron a aplicarse en Costa Rica, Honduras y Guatemala. Como se sabe esta segunda solución fue la que terminó por imponerse, incluso en El Salvador a partir de 1989 y en Nicaragua desde 1990.

El "nacionalismo revolucionario" enfatizó la intervención del estado en la economía nacionalizando algunos sectores claves como los bancos y el comercio exterior, y promovió procesos muy rápidos de reforma agraria. En el caso de Nicaragua la expropiación de las empresas de la familia Somoza y sus allegados permitió la creación de un amplio sector de "propiedad social" que comprendía algo así como un tercio del conjunto de la actividad económica del país; la reforma agraria, por su parte, redistribuyó más de un millón y medio de hectáreas entre 1980 y 1988, lo cual representa un 24% del total de tierra agrícola del país.¹⁰ En El Salvador las nacionalizaciones, decretadas en 1980 afectaron los bancos, el comercio exterior; la reforma agraria establecida en 1980 preveía tres etapas: la primera afectando a las propiedades superiores a 60 hectáreas fue ejecutada de inmediato mientras que la tercera, referida a los campesinos que ocupaban en forma precaria o en alquiler propiedades de menos de 5 hectáreas se fue haciendo efectiva entre 1980 y 1984. La segunda etapa destinada a transformar la propiedad de las fincas entre 10 y 50 hectáreas nunca llegó a aplicarse. En el conjunto la reforma agraria salvadoreña afectó casi 300 mil hectáreas, es decir un 21% de la tierra agrícola del país.¹¹ Estas medidas no pudieron evitar los desequilibrios macroeconómicos ya existentes ni tampoco lograron reactivar la economía en forma sostenida. Aunque es innegable que el costo económico de la guerra civil fue una carga negativa tanto para Nicaragua como para El Salvador,

¹⁰ Calculado según Wheelock, 10 años, cifras del total de tierras según FAO

¹¹ Ver también más adelante el cuadro 7.

no parece plausible atribuir el fracaso de dichas políticas “nacionalistas” a esos costos adicionales. La política implantada en Perú por el gobierno del APRA (1985-89) ofrece en este sentido comparaciones interesantes: un plan económico altamente “intervencionista” basado en la reactivación de la demanda interna tuvo resultados positivos al principio pero condujo después de 1987 a una situación de hiperinflación y severa contracción económica.¹²

Los programas de estabilización y ajuste estructural se fueron imponiendo durante la década de 1980.¹³ Como es sabido en su adopción fue decisiva la intervención de la AID, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, y de organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Enfrentados a severos desbalances macroeconómicos, como desequilibrios en la balanza de pagos, déficits en el sector público o acuciantes vencimientos de la deuda externa, los gobiernos no tuvieron más remedio que acudir a los organismos financieros recién mencionados. El otorgamiento de nuevos créditos o la ampliación de los ya existentes fue condicionada a un “paquete” de medidas conocida como “plan de estabilización” que buscaba el restablecimiento del equilibrio macroeconómico dentro de límites juzgados como aceptables. Estos planes incluyeron severos recortes en el gasto público, devaluaciones y aumentos en los impuestos. El segundo paso, una vez que se lograban avances en la estabilización, implicaba comenzar con el llamado “ajuste estructural”. El financiamiento externo se orientaba ahora a promover un cambio mucho más profundo de la estructura económica:

- a) Abandono del modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones;
- b) Promoción de las exportaciones “no tradicionales” como sector líder del crecimiento económico;
- c) Apertura económica en el sentido de eliminar el proteccionismo en todas sus formas (tarifas aduaneras elevadas, subsidios a las exportaciones, beneficios fiscales diferenciales, convenciones colectivas con beneficios a los trabajadores no vinculados a aumentos en la productividad, etc.);
- c) Disminución de la intervención del estado en la economía incluyendo la privatización de empresas y servicios públicos;
- d) Reducción general del gasto y el empleo en el sector público y en particular descenso del gasto gubernamental en el sector social (salud, educación, etc).

Este nuevo modelo de desarrollo, inspirado en el ejemplo chileno y el de los llamados “tigres asiáticos” fue logrando un consenso bastante amplio, más allá de la imposición inicial abanderada por la AID y los organismos financieros

¹² Véase Edwards, *Op.Cit.* pp. 54-56.

multilaterales como el Banco Mundial. Hacia finales de la década de 1980 la coincidencia de políticos, empresarios y medios de comunicación en torno al modelo llamado "neoliberal" se había extendido ampliamente por toda América Latina y no deja de ser sintomático que en 1992 la CEPAL misma, antiguo bastión del modelo de "desarrollo hacia adentro" empezó a rendir tributo a esta nueva ortodoxia.¹⁴

Los resultados de estas nuevas políticas en Centroamérica pueden evaluarse examinando los cuadros 2, 3, 4 y 5. La composición de las exportaciones se ha modificado notablemente. Aunque subsisten importantes diferencias entre países, la tendencia a un aumento en la importancia relativa de las exportaciones "no tradicionales" es innegable. También es claro que el afianzamiento de este proceso de cambio ha ocurrido a comienzos de la década de 1990. Los cuadros 4 y 5 ilustran la situación de los países centroamericanos en relación con la deuda externa. Los beneficios de las nuevas políticas a nivel macroeconómico se pueden apreciar mejor en relación con los arreglos sobre la deuda. En 1992 era visible cómo en el caso de Costa Rica, el país que por entonces había avanzado más en el proceso de ajuste estructural, una deuda per capita muy elevada se podía pagar con un porcentaje relativo del valor de las exportaciones de bienes mucho menor que en 1980. Las tendencias del producto per capita (cuadro 1) pueden también interpretarse en un sentido similar. A comienzos de la década de 1990 se observa una recuperación de los niveles existentes a finales de los años 1970.

Ahora bien, el éxito a nivel macroeconómico de las políticas de estabilización y ajuste estructural tuvo como correlato un marcado deterioro en las condiciones sociales. El aumento del desempleo y el subempleo, el crecimiento del sector informal de la economía y el deterioro general en las condiciones sanitarias es algo tan innegable como la recuperación en los principales índices macroeconómicos. Dicho en otros términos, la recuperación y transformación de la economía está teniendo costos sociales muy elevados. Más adelante volveremos sobre este aspecto.

Para concluir estos comentarios sobre la crisis económica y sus efectos hay que mencionar todavía dos aspectos importantes. El primero se refiere a las remesas de los inmigrantes y el segundo a la importancia creciente del lavado de dólares provenientes del narcotráfico. En el cuadro 6 se presentan cifras sobre el monto de las remesas de los inmigrantes salvadoreños y guatemaltecos a la par de los valores de las exportaciones de bienes y servicios. Se puede apreciar como, en ambas economías las remesas tienen una importancia económica notable. Este efecto, en cierta forma inesperado, es un

¹³ Véase Rodríguez, Miguel Angel (compilador). *Ajuste estructural y progreso social. La experiencia centroamericana*. San José, Libro Libre, 1992.

¹⁴ Véase, CEPAL, *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe*. Santiago, 1992.

resultado derivado de los fenómenos de emigración provocados por la guerra civil. Sobre el significado social de estas remesas comentaremos más adelante.

Sobre el lavado de dólares no hay datos económicos confiables aunque su importancia es innegable. Sobre lo que no hay dudas es que este nuevo sector "informal" de la economía es hijo directo de la crisis y la guerra civil. La proliferación de la corrupción, el tráfico ilegal de armas, la presencia constante de acciones subrepticias del tipo más diverso y variado, prepararon el terreno para la implantación firme y sólida de una actividad clandestina muy lucrativa e independiente de cualquier color político o ideológico. De alguna manera hay que considerar el efecto del lavado de dólares como parte de las exportaciones "no tradicionales" o si se quiere como un componente no deseado del nuevo modelo de desarrollo.

4. ¿A DÓNDE CONDUJO LA CRISIS POLÍTICA?

El legado político de la guerra civil puede resumirse en dos palabras: elecciones regulares y gobiernos civiles. En la historia reciente del istmo -por no decir en todo el pasado- esto constituye algo inédito. En la mayoría de los países centroamericanos los procesos electorales, establecidos por las constituciones y las leyes, carecieron casi siempre de legitimidad y estuvieron enizados por golpes de estado, campañas con candidatos únicos y fraudes de diferente estilo. Lo mismo puede decirse de los gobiernos civiles, subordinados en casi todo -cuando tuvieron la oportunidad de sobrevivir, a los dictados del poder militar.

Esto lleva a una segunda reflexión. El desarrollo de procesos electorales regulares y legítimos, ajustados a los períodos establecidos constitucionalmente, implicó la retirada a segundo plano del poder militar. Ahora bien, esta retirada de los militares cubre tanto a los ejércitos establecidos cuanto a las fuerzas guerrilleras que estuvieron en operación durante las décadas de 1970 y 1980. En términos del arte de la guerra este resultado político debe leerse como una derrota: ni las fuerzas insurgentes (guerrillas en El Salvador y Guatemala, la Contra en Nicaragua) fueron capaces de tomar el poder ni los ejércitos regulares pudieron tampoco aniquilarlas. Dicho en otras palabras el conflicto militar condujo a un empate que se resolvió por la vía de la negociación. En este sentido cabe afirmar que en Centroamérica los militares perdieron la guerra.

La consolidación de gobiernos civiles, electos en forma legítima, fue uno de los caballos de batalla retórica de las administraciones de Reagan y Busch y constituía una de las recomendaciones del famoso Informe Kissinger sobre la crisis centroamericana. Pero en los cálculos norteamericanos el triunfo de la solución "democrática" era apenas la cara política de

la derrota militar de las fuerzas insurgentes; como se sabe en pro de esto último ambas administraciones no escatimaron un amplio apoyo militar, el cual sólo estuvo limitado por las circunstancias políticas internas de los Estados Unidos.

Por otra parte, la consolidación de gobiernos democráticos y pluralistas tampoco fue algo buscado por las fuerzas revolucionarias. Estas se propusieron la toma del poder y no es un misterio que pretendían establecer regímenes socialistas siguiendo el modelo cubano o alguna otra forma parecida de socialismo tercermundista. En otros términos, no deja de ser irónico que el efecto político más notable de las guerras revolucionarias desatadas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala fue precisamente la consolidación de un modelo político democrático repetidamente denunciado como "burgués" y producto de la intervención imperialista.

Lo nuevo de la situación política abierta por las negociaciones de paz no es pues el modelo de gobierno o la organización de elecciones sino la composición de las fuerzas sociales que están ahora dispuestas a participar en el sistema político. No hay novedad en los principios sino en la práctica de la política. A la luz de las últimas décadas de la historia centroamericana este resultado es tan novedoso como inesperado. A veces parece como un regreso al período que siguió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como si en las puertas del nuevo milenio se intentara recuperar o reconstruir un momento político en el cual hubo grandes ilusiones trocadas súbitamente en frustraciones y desesperanzas. Sin embargo, puede que la similitud sea apenas superficial. No podemos asegurar que los actores sociales o las circunstancias estructurales sean verdaderamente comparables. Para evaluar esto debemos explorar los cambios profundos que han afectado las estructuras sociales.

5. LOS GRANDES CAMBIOS DEMOGRAFICOS.

La guerra civil provocó una trágica secuela de muertos, emigrados y refugiados. Se tratará de ver enseguida en qué medida estos fenómenos afectaron las estructuras y el cambio demográfico. En el cuadro 7 se presentan las tasas brutas de mortalidad, las cuales miden el nivel general de los decesos, y las tasas de mortalidad atribuibles a las muertes ocasionadas por la guerra; ambas medidas se han calculado por cada mil habitantes. Los que indican ambas medidas es simple: el nivel general de mortalidad observado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala durante la década del ochenta era bajo y fue apenas incrementado por la guerra civil. Esto quiere decir que en relación con el total de la población de cada

país los 90 000 muertos de El Salvador o las 80 000 víctimas de Nicaragua, ocurridas a lo largo de poco más de una década tuvieron, en términos estrictamente demográfico, un impacto relativo muy bajo.

La perspectiva cambia notablemente si pasamos a considerar la migración. Las tasas de emigración son altas e incluso en el caso de El Salvador ésta supera el valor de la tasa bruta de mortalidad. Un examen de las tasas de emigración por quinquenio en el período 1950-1995 (Ver el gráfico 1) muestra la elevada correlación entre el comportamiento de esta variable y el desarrollo de la crisis centroamericana. Todo esto es bien conocido y ha sido señalado en forma repetida: la guerra civil provocó un flujo continuo de migrantes y desplazados. Lo que ahora queda precisado es que, en términos cuantitativos, la magnitud de la emigración fue muy superior a la de las muertes atribuibles a la guerra, es justamente de esas salidas masivas de población que pueden esperarse grandes transformaciones en la estructura demográfica. El éxodo sin retorno tiene, sobre la pirámide de edades de una población un efecto muy parecido al de un aumento significativo de la mortalidad por encima de los niveles considerados como normales o esperables. Dicho en otros términos, más que los muertos por la guerra civil, los verdaderos agentes del cambio demográfico ocurrido en Centroamérica como consecuencia de la crisis, fueron los emigrantes.

La primera comprobación de los profundos cambios demográficos experimentados por la región centroamericana proviene del censo de población de El Salvador, efectuado en 1992 (ver el gráfico 2). La base de la pirámide se ha “encogido” y parece que “falta gente” en las edades propias de los adultos jóvenes; por otro lado, este “faltante” es más notable en los hombres que en las mujeres. La naturaleza de estos cambios queda mejor ilustrada si se superpone a la pirámide del censo la que fue estimada por las proyecciones de CELADE en 1978. En el horizonte de 1978, justo antes de los comienzos de la crisis, El Salvador tenía las características demográficas de cualquier país del Tercer Mundo: fecundidad muy elevada, mortalidad en descenso, crecimiento rápido y emigración constante y moderada. Durante los años de la crisis este patrón se modificó sustancialmente hacia: fecundidad en descenso, mortalidad constante y fuerte emigración, con el resultado de un crecimiento poblacional mucho más lento que en el pasado y el desarrollo de una importante comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos.

El “encogimiento” de la base de la pirámide de edades de 1992 no tiene que ver directamente con la emigración sino más bien con la reducción relativa en el número de nacimientos. En efecto, la tasa global de fecundidad¹⁵ descendió de

¹⁵ Número de hijos que en promedio tendría una mujer si durante su vida fértil (y sin estar sometida a riesgos de mortalidad) tuviera sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas en el período en estudio.

4.17 hijos por mujer en 1983-1988 a 3.83 en 1988-93.¹⁶ Por otra parte, los datos del censo de 1992 permiten calcular una tasa global de fecundidad de 3.1 hijos por mujer; el mismo cálculo efectuado según área de residencia arroja una diferencia muy significativa: mientras que en las áreas rurales se registran 4.02 hijos por mujer, en las urbanas la cifra baja a 2.43.¹⁷ Basta recordar que en 1975-80 la tasa global de fecundidad era de 5.7 hijos por mujer para apreciar la magnitud de los cambios. Es obvio que, como resultado de la crisis y la emigración, se ha producido en El Salvador una importante y muy rápida caída en la fecundidad.

Otro cambio relevante ha ocurrido en el proceso de urbanización. El censo de 1992 registró en El Salvador un 50.4% de población urbana. Este hecho es de por sí significativo en un país que ha sido masivamente rural durante toda su historia. Sin embargo, todavía más impresionante es el que la inmensa mayoría de la población urbana se ubique en el área metropolitana de San Salvador: de acuerdo con el censo allí vivían casi un millón y medio de salvadoreños, es decir el 29% de la población del país. En suma, los desplazamientos ocasionados por la guerra civil han provocado un rápido proceso de urbanización "forzada" y metropolización. En Nicaragua y Guatemala, aunque no disponemos de datos tan precisos como los de El Salvador, todo indica que se han producido situaciones muy parecidas.

Con todos estos elementos en mente puede abordarse ahora el tema de emigración hacia los Estados Unidos. El cuadro 8 indica el número de inmigrantes centroamericanos registrados por el Censo de los Estados Unidos de 1990; para fines comparativos se indica también la cifra de inmigrantes mexicanos. El caso de El Salvador es de nuevo extremo; ha emigrado al país del norte más de un 8% de la población salvadoreña y dichos migrantes se concentran mayoritariamente en la región de la ciudad de Los Angeles. Eso hace que el número de salvadoreños que viven en ella sólo es superado por el de los que viven en San Salvador. La misma situación se observa en el caso de los migrantes guatemaltecos. No deja de ser paradójico que los barrios de salvadoreños y guatemaltecos en Los Angeles constituyen, desde el punto de vista de la masa poblacional urbana, las segundas ciudades en importancia, después de las respectivas capitales nacionales. Como las poblaciones migrantes siguen manteniendo lazos estrechos con sus familiares en el país de origen la multiplicidad de intercambios socio culturales derivados de esta situación es no sólo notable sino también compleja de analizar. Lo más

¹⁶ Datos provenientes de encuestas, ver Cáceres Henríquez, José *et al.* "Fecundidad, prevalencia anticonceptiva y salud materno infantil. El Salvador 1988-1993", en Rosero Bixby, Luis, Peble Anne y Bermúdez Méndez, Alicia (editores). *De los Mayas a la planificación familiar. Demografía del Istmo*. San José, Programa Centroamericano de Población, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997, pp. 303-322.

¹⁷ Publicación de la Dirección General de Estadística y Censos en *La Prensa Gráfica* del 29 de julio de 1995 (suplemento).

obvio y llamativo, al menos por el momento, son las remesas enviadas por los inmigrantes y cuya su importancia económica ya fue subrayada. De acuerdo con los datos del censo de 1992 un total de 244 274 personas se declararon como recibiendo ayuda económica por parte de familiares residentes en el exterior; aunque es posible que esta cifra esté subestimada, puede afirmarse que al menos un 5% de la población de El Salvador recibe ayuda económica de este tipo.

Como ya se dijo fenómenos de emigración y desplazamiento similares a los ocurridos en El Salvador afectaron también a Guatemala y Nicaragua. El proceso de urbanización forzada y metropolización ocurrió también en esos países y se produjo con una intensidad similar. Lo que no se observa en Nicaragua y Guatemala es un descenso en la fecundidad tan rápido y pronunciado como el sucedido en El Salvador. Por el momento los datos disponibles son incompletos y hay que esperar la publicación completa de los censos de población efectuados en 1994 en Guatemala y en 1995 en Nicaragua.

Para cerrar estas notas sobre el cambio demográfico vale la pena incluir un breve comentario sobre el caso de Belice. La llegada de varios miles de refugiados guatemaltecos y salvadoreños a un país con una masa poblacional relativamente pequeña (unos 200 000 habitantes en 1994) y significativas tasas de emigración hacia los Estados Unidos, tiene un impacto particularmente significativo desde el punto de vista cultural y demográfico. Un uso creciente del idioma español y una mayor "hispanización" parecen estar ya en proceso en ese pequeño país centroamericano.

6. EL RESURGIMIENTO DE LAS ETNIAS.

Durante y después de la crisis se consolidó en Centroamérica una nueva presencia étnica. Los grupos indígenas, particularmente en Guatemala y Nicaragua, se abrieron nuevos espacios de presencia política y social, y lograron incorporar una parte sustancial de su agenda de reivindicaciones en el primer plano de la actualidad nacional e internacional. El Premio Nobel de la Paz otorgado en 1994 a Rigoberta Menchú es, en este sentido, tanto un símbolo como un síntoma: expresa el éxito de los logros y también lo penoso y difícil de la trayectoria que hubo que seguir para obtenerlos.

En Guatemala la nueva movilización de los indígenas comenzó en la década de 1970, luego del fracaso de la estrategia guerrillera foquista. Los grupos insurgentes lograron implantarse en las zonas indígenas y en pocos años la guerra civil guatemalteca cambió de escala; al mismo tiempo, el componente étnico pasó a ser un elemento esencial en los enfrentamientos. La respuesta contrainsurgente del ejército guatemalteco se focalizó en los pueblos y aldeas indígenas y, como es bien conocido, allí ocurrieron horribles masacres; a los poblados arrasados les siguió una diáspora forzada que

condujo a miles de indígenas a refugiarse en zonas fronterizas (México y Belice) o bien mucho más lejos, en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la migración interna hacia la ciudad capital y el área metropolitana se intensificó en forma notable. Esta situación, que alcanzó su peor momento en 1982, fue especialmente crítica entre 1978 y 1985. A partir de 1987, y como parte de los tratados de paz firmados en Esquipulas, comenzó un lento proceso de negociaciones que recién culminó a fines de 1996 cuando se llegó a un arreglo definitivo entre el gobierno guatemalteco y las organizaciones guerrilleras.

Ahora bien, por debajo todo esto persisten dos hechos fundamentales. El primero es que la población indígena guatemalteca crece a un ritmo más rápido que la población ladina. Baste mencionar al respecto que en 1980 la tasa global de fecundidad era de 6.5 hijos por mujer entre la población indígena y de 5.2 hijos entre la población ladina. Los datos del censo de 1994, por su parte, permiten estimar esa medida en 5.36 hijos para los indígenas y 3.86 para los ladinos. Este crecimiento demográfico más rápido de la población indígena permite explicar, en parte, el segundo hecho fundamental: el proceso de ladinización se ha estancado. En 1994 el censo registró un 42.8% de indígenas, una cifra muy parecida a la de arrojaron los censos de 1981 (41.9%), 1973 (43.8%) y 1964 (42.2%). Nótese en contraste que el porcentaje de población indígena registrado en 1921 fue del 65% mientras que en 1954 esa proporción había bajado al 54%. Dicho en otros términos, desde la década de 1960 la proporción de indígenas en la población guatemalteca se mantiene constante.

Aunque el costo en términos de vidas humanas ha sido cruel y despiadado hay que reconocer que el saldo neto de la guerra civil ha sido un verdadero proceso de resurgimiento y revitalización de las etnias indígenas guatemaltecas. Un tema abierto, pero que se resolverá en los próximos años, es si continuará predominando la fragmentación de las etnias y sus organizaciones (alrededor en 300 en 1996) o si la idea de una "nación maya" crecientemente promovida por un grupo de intelectuales y dirigentes indígenas, permitirá desarrollar un movimiento mucho más unificado.

En la Nicaragua sandinista, las etnias de la Mosquitia desafiaron el control político impuesto por los nuevos gobernantes y rápidamente entraron en un serio conflicto con el Ejército Popular Sandinista. Los resultados fueron la destrucción de poblados indígenas y una cadena de desplazamientos forzados, lo cual puso en entredicho la existencia misma de esos grupos indígenas. Después de los acuerdos de paz, en 1987, la principal reivindicación de las etnias de la Mosquitia tiene que ver con la autonomía política regional y el reconocimiento de los derechos tradicionales sobre el uso de la tierra y los recursos naturales. La frontera de colonización agrícola impulsada por los campesinos mestizos del occidente

de Nicaragua avanza, desde hace por lo menos dos décadas, hacia zonas tradicionalmente ocupadas por los indígenas de las Mosquitia. Estos conflictos no han sido resueltos todavía.

7. EL DESAFIO ECOLOGICO

La crisis de los años ochenta coincide con un *turning point* en el muy largo plazo, que tiene que ver con las relaciones entre población y recursos naturales. Los elementos básicos de esta encrucijada se resumen a continuación.

a) **Fin de la frontera de colonización.** Todos los países se acercan hoy a la situación de fin de la frontera de colonización. Lo que durante siglos fueron espacios abiertos para el poblamiento están hoy agotados y cualquier avance de la frontera pone seriamente en entredicho el equilibrio ecológico de la región.

b) **Fin del bosque natural.** Revela mejor que cualquier otro aspecto dicho dilema ecológico. La creación de áreas protegidas (en casi todos los países) es todavía una respuesta tímida y parcial a este desafío mayor. Señala, sin embargo, la dirección de una solución posible.

c) **Fin de la Centroamérica vacía o escasamente poblada.** Hacia 1930 la población del istmo centroamericano recuperó, posiblemente, el nivel del poblamiento que existía en vísperas de la llegada de la conquista (unos 6 millones de habitantes). Hacia finales del siglo XX, dicha población se ha multiplicado por cinco y es mayoritariamente urbana. La conciencia de un espacio finito reemplaza ahora la imagen de una selva misteriosa e inagotable.

La diversidad biológica y cultural que se observa en el istmo es un resultado de miles de años de evolución, y quizás constituye el patrimonio más precioso de la región. Cómo preservar esa diversidad, en el contexto recién enunciado, es el desafío más serio y difícil que enfrentan hoy las sociedades centroamericanas.

8. COMPARACIONES Y PERSPECTIVAS:

Desde un punto de vista histórico de largo plazo interesa ahora responder una pregunta difícil. ¿En qué medida la crisis de la década de 1980 es comparable con otras crisis del pasado centroamericano? Comenzaremos por un repaso regresivo de lo que podrían ser situaciones similares a lo vivido en los turbulentos años ochenta.

La época de las guerras bananeras (1906-1933) es el primer período que se presta para una comparación. En esos años abundaron las intervenciones norteamericanas y las guerras civiles asolaron Honduras y Nicaragua. La inestabilidad política de estos dos países amenazó, en varias ocasiones, la paz de la región y hubo dos tratados generales, firmados por los países centroamericanos en Washington (1907 y 1923), para tratar de remediar la situación. Sin embargo, cuando se estudia este período con profundidad se llega enseguida a la conclusión de que la inestabilidad política es algo más bien episódico y recurrente, que tiene alcances limitados. El orden oligárquico agroexportador está bien consolidado en toda la región y no fue amenazado por la sucesión de rebeliones internas y guerras civiles. Dicho de otro modo, los vistosos acontecimientos que colorean el período como para que quede bien caracterizado con el sobrenombre de "época de las guerras bananeras" no fundan ningún orden nuevo ni tampoco anuncian mucho sobre el porvenir.

Distinta es la situación si retrocedemos al período 1826-1857, en que se produce en Centroamérica el difícil nacimiento de las naciones modernas. En este largo ciclo de 30 años, en que predominan las guerras civiles, incluyendo un fuerte componente étnico y campesino (insurrección de Carrera, de Anastasio Aquino, etc.), las intervenciones extranjeras (británica, norteamericana, filibusteras) y la crisis económica (derrumbe del orden colonial sin que lo sustituya todavía otro más viable), se preparan, sin embargo, las estructuras básicas del desarrollo posterior:

- a) fragmentación en repúblicas separadas;
- b) nueva economía de exportación (Café + ferrocarril + bananos);
- c) del fracaso de la república federal y del éxito del orden conservador (Carrera) surge un nuevo tipo de estado que institucionalmente reemplaza al colonial. Este nuevo tipo de estado se caracteriza por un liberalismo a medias, autoritario y paternalista, el cual será llevado a su pleno desarrollo después de 1871.

Dicho de otro modo, en este largo período de crisis se fijan los parámetros básicos que presiden el desarrollo posterior hasta muy cerca de los años 1980.

Lo sucedido durante la crisis de la década de 1980 y las consecuencias de estos procesos, visibles en los noventa, se parece más a este largo período de gestación de las naciones modernas, que a cualquier otro. Se puede afirmar esto al menos como una hipótesis provisoria. No sabemos en realidad si se está gestando, para la región como un todo, un verdadero orden nuevo. Esto se jugará obviamente en el futuro por lo que no nos queda otra alternativa que formular, con base en signos e interrogantes, una especulación razonablemente fundada.

Cuadro 1:

Producto nacional bruto per capita (metodología del Banco Mundial, en dólares)

	GUATEMALA	EL SALVADOR	HONDURAS	NICARAGUA	COSTA RICA	AMERICA LATINA Y EL CARIBE
1973	460	360	340	400	810	890
1974	550	420	370	580	940	1120
1975	620	470	400	680	1030	1290
1976	700	520	430	710	1100	1380
1977	800	590	480	780	1310	1420
1978	920	710	560	750	1560	1550
1979	1080	800	640	590	1830	1820
1980	1200	790	700	690	2030	2130
1981	1240	770	760	770	1510	2280
1982	1160	720	710	780	1080	2140
1983	1100	710	690	780	950	1880
1984	1120	750	730	790	1120	1810
1985	1150	810	790	760	1270	1770
1986	1060	850	830	800	1470	1840
1987	1010	940	940	920	1650	1950
1988	970	1000	980	830	1710	2080
1989	960	1000	870	430	1710	2110
1990	920	1030	700	360	1790	2280
1991	940	1090	600	280	1830	2470
1992	1000	1200	600	340	2010	2730

Fuente: World Tables 1995

1973	0	21.3	13	Aplicar	11	11.5
------	---	------	----	---------	----	------

Cuadro 2:
Composición de las exportaciones (en %)

COSTA RICA				HONDURAS			
	1950	1975	1990		1950	1975	1990
Café	32	19.6	11	Bananos	74	21	43
Bananos	57	29.2	26	Café	10	19.4	21
Carne	0	7.7	2	Algodón	0	1.5	0
Azúcar	0	9.8	1	Carne	0	6.2	3
Otros bienes	11	34	60	Azúcar	0	2.4	1
Total	100	100	100	Otros bienes	16	49.5	32
				Total	100	100	100

GUATEMALA				NICARAGUA			
	1950	1975	1990		1950	1975	1990
Café	74	25.9	26	Café	65	12.8	21
Bananos	27	5.4	7	Algodón	7	25.5	11
Carne	0	2.6	3	Carne	0	1.9	20
Algodón	0	11.5	2	Azúcar	0	11.4	11
Azúcar	0	24.3	13	Otros bienes	28	48.4	37
Otros bienes	0	31	49	Total	100	100	100
Total	100	100	100				

EL SALVADOR			
	1950	1975	1990
Café	90	35.8	45
Algodón	4	14.3	0.2
Azúcar	0	15.4	3
Otros bienes	6	34.5	52
TOTAL	100	100	100

FUENTE: 1950, IMF, International Financial Statistics, vol.XIII-1, January 1960
 1975, Centroamerica en cifras, datos de CMC
 1990. CMC, Boletín estadístico 1991.

Cuadro 3:**Exportaciones tradicionales como porcentaje del total de exportaciones**

	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
1981	56	67	74	73	58
1982	60	69	75	77	62
1983	61	72	71	80	62
1984	62	70	73	77	61
1985	68	76	73	84	65
1986	70	79	78	78	66
1987	59	66	78	81	59
1988	60	65	77	79	51
1989	57	51	69	71	46
1990	55	51	79	73	47
1991	49	46	77	n.d	50
1992	44	36	70	n.d	45
1993	45	40	66	n.d	45

Las exportaciones tradicionales incluyen café, banano, carne, azúcar, algodón y mariscos.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. *Boletín estadístico*, varios números.

Cuadro 4:**Deuda externa global por habitante en dólares**

	1980	1992
Guatemala	152	265
El Salvador	260	433
Honduras	423	683
Nicaragua	567	2731
Costa Rica	1394	1260

Fuente: Cálculos de Cepal en Flacso. *Centroamérica en cifras, 1980-1992*, San José, 1995.

Cuadro 5:**Servicio de la deuda externa global como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios (%)**

	1980	1992
Guatemala*	3.4	8.9**
El Salvador	11.4	39.3
Honduras	20.2	39.1
Nicaragua*	16.2	31.9
Costa Rica	39.8	21.50

* corresponde a la deuda pública

** corresponde a 1991

Fuente: Flacso. *Centroamérica en cifras, 1980-1992*, San José, 1995.

Cuadro 6:

Algunos rubros de la balanza de pagos de El Salvador y Guatemala

EL SALVADOR

(millones de dólares)

	Exportaciones totales de bienes y servicios	Remesas de los inmigrantes	Variaciones en las reservas internacionales netas
1979	1356	49.2	134
1980	1271	10.9	81
1981	970	42.2	84
1982	868	77.7	-7
1983	931	92.5	-29
1984	954	114.2	7
1985	951	126.2	-21
1986	1056	138.6	-58
1987	951	167.4	-78
1988	963	194.4	25
1989	834	203.7	-98
1990	903	322.1	-148
1991	930	467.9	70
1992	1006	686.5	-92

GUATEMALA
(millones de
dólares)

Exportaciones
totales de bienes y
servicios

Remesas de los
inmigrantes

Variaciones en las
reservas
internacionales
netas

1979	1552		26
1980	1834		258
1981	1526		301
1982	1312	27	38
1983	1205	14	-10
1984	1281	13	-17
1985	1191	9	-107
1986	1203	22	-109
1987	1167	43	54
1988	1301	40	139
1989	1455	64	-69
1990	1588	97	30
1991	1753	123	-555
1992	1967	173	20

Fuente: World Tables 1995.

Cuadro 7:

Guerra civil, mortalidad y emigración

(Tasas por cada mil habitantes)

Indicadores	Guatemala	El Salvador	Nicaragua
Tasas brutas de mortalidad, 1980-85	11 por mil	11 por mil	10 por mil
Tasas brutas de mortalidad atribuibles a la guerra civil	1 por mil (1966-1987)	2 por mil (1980-1991)	2.4 por mil (1975-1990)
Tasas brutas de emigración	6 por mil (1975-1995)	12 por mil (1975-1990)	5 por mil (1975-1995)

Fuentes: Cálculos propios basados en CELADE, Boletín demográfico, No 59, Enero de 1997. América Latina: Proyecciones de población, 1950-2050; Seligson, Mitchell y McElhinny, Vincent. "Guerra de baja intensidad, muerte de alta intensidad: impacto demográfico de las guerras en El Salvador y Nicaragua." en Rosero, Pebley y Bermúdez, Ed. De los Mayas a la planificación familiar: demografía del istmo". San José, Editorial Universidad de Costa Rica-Programa Centroamericano de Población, 1997, pp. 73-95.

Cuadro 8

Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos, 1990

País de origen	Viven en los Estados Unidos	Viven en la región de Los Angeles	Los que viven en Estados Unidos como porcentaje de la población del país de origen
El Salvador	458700	241500	8.70%
Guatemala	216000	126800	2.30%
Otros países centroamericanos	366400	74900	2.50%
México	4459800	1717900	5.50%

Fuente: Censo de los Estados Unidos, 1990.

Tasas de migración anual, por cada mil habitantes

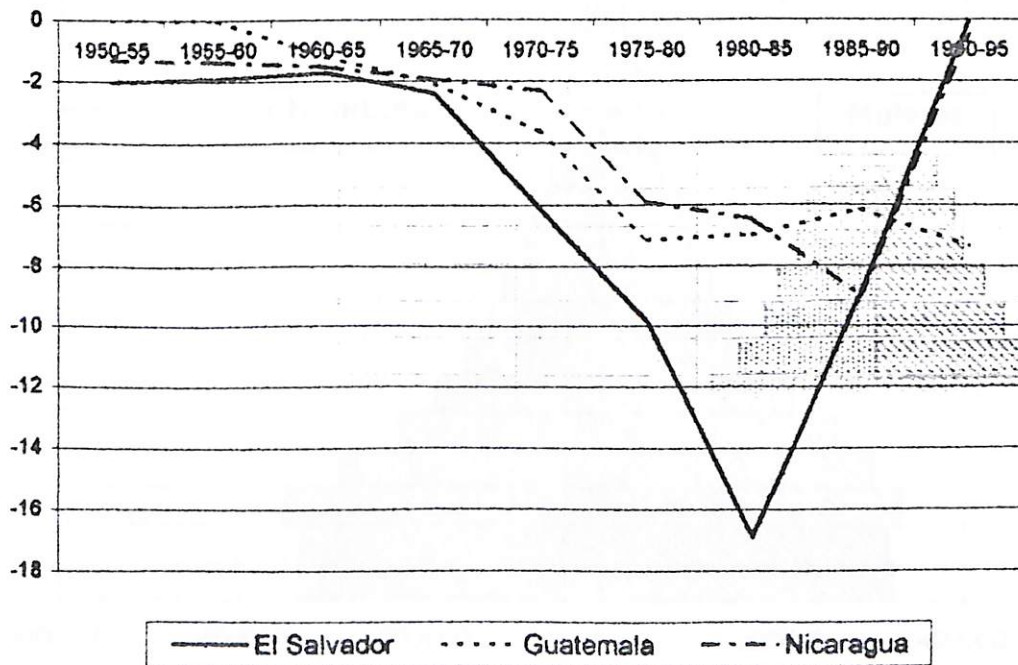


Gráfico 1

El Salvador, 1992: Pirámide de edades según el censo de 1992

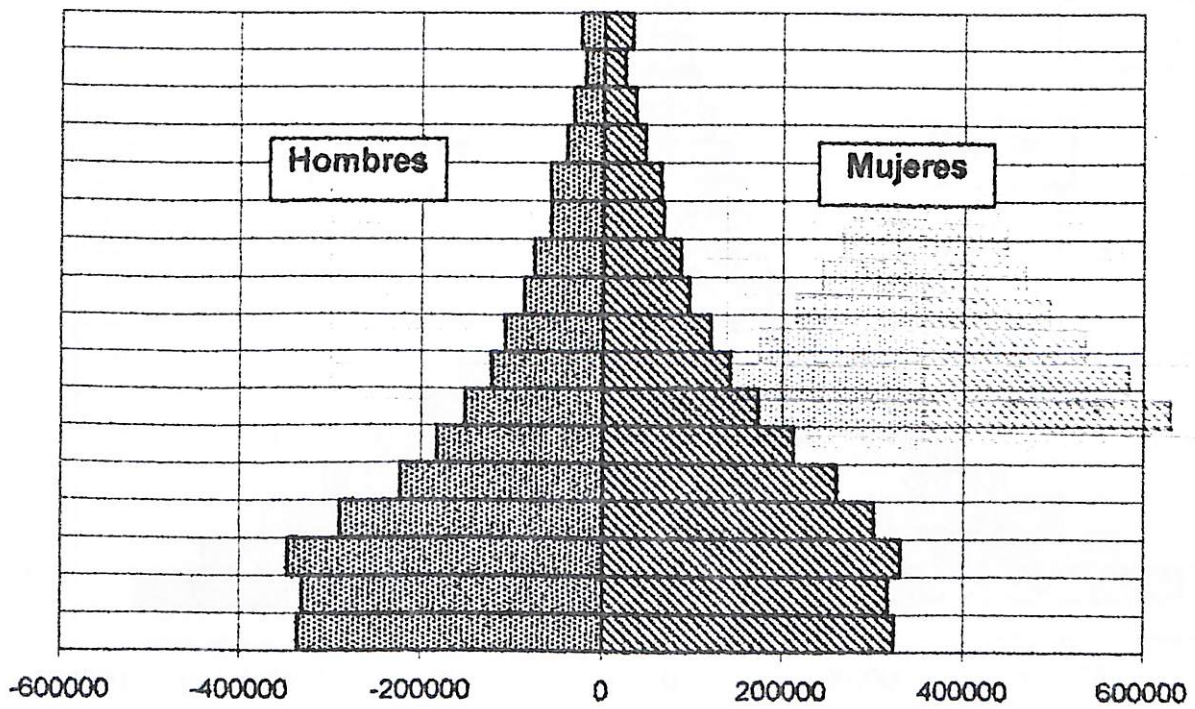


Gráfico 2 (a)

El Salvador, 1990: Pirámide de edades según la proyección
efectuada en 1978

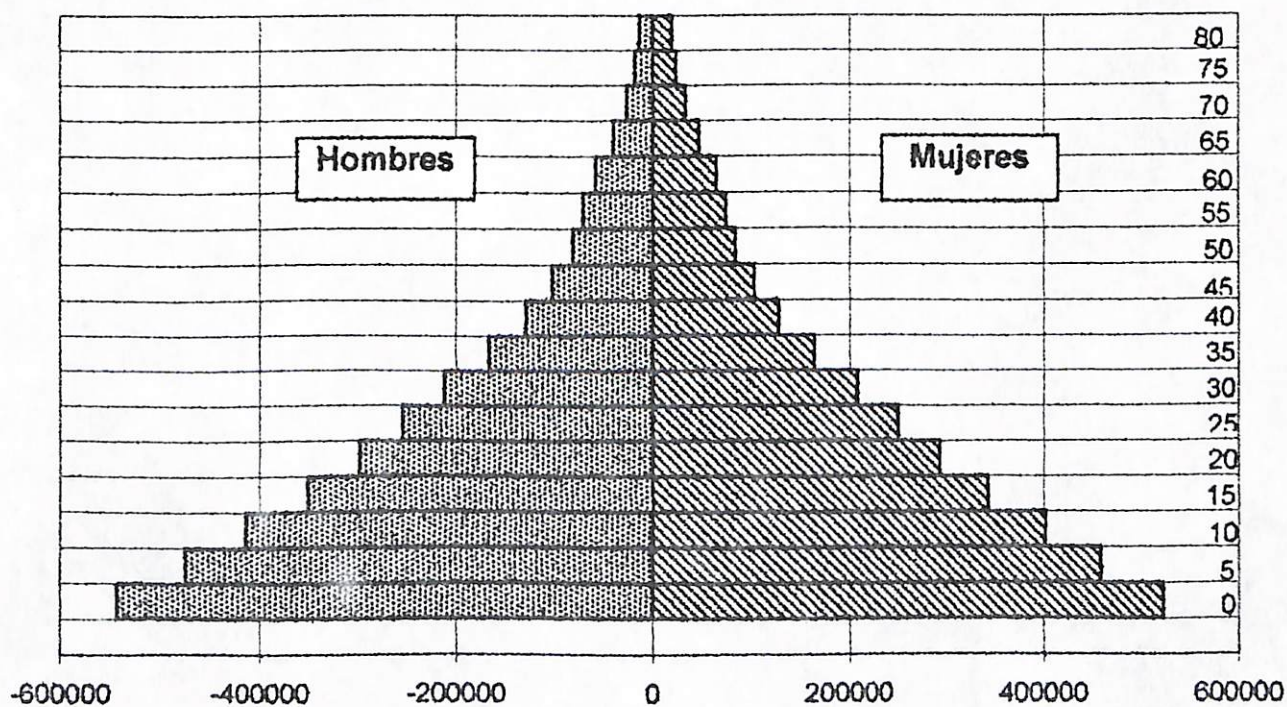


Gráfico 2 (b)